



JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Santiago de Cali, veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Auto Interlocutorio No. 354

Radicación: 76001-33-33-006-2023-00055-00
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandantes: MIRYAM RAMÍREZ CIFUENTES y OTROS
lawyer.calicolombia@hotmail.com
equipojuridicoshalom@hotmail.com
ronriver87@hotmail.com
albasoofia@gmail.com
olgasalazar319@hotmail.com
jasara82@hotmail.com
amparamirezCIFUENTES@hotmail.com

Demandado: Distrito Especial de Santiago de Cali
notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Miryam Ramírez Cifuentes (principal afectada), Ronald Rivera Ramírez (hijo de la afectada principal), Walter Rivera Ramírez (hijo de la afectada principal), Zoila Cifuentes de Ramírez (madre de la afectada principal), Amparo Ramírez Cifuentes (hermana de la afectada principal), María Mercedes Ramírez Cifuentes (hermana de la afectada principal), Fernando Ramírez Cifuentes (hermano de la afectada principal), Jaime Salazar Ramírez (sobrino de la afectada principal), Olga Mercedes Salazar Ramírez (sobrina de la afectada principal), Diana Maryuri Narváez Castaño (nuera de la afectada principal) y Alba Sofía Medina Millán (nuera de la afectada principal), promueven demanda de reparación directa en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, con el objeto que se le declare administrativa y patrimonialmente responsable de los daños a la salud física y psicológica de la señora Miryam Ramírez Cifuentes, con ocasión de la falta de mantenimiento de la vía pública¹.

Como consecuencia de ello, solicitan se condene a la parte demandada al pago de los siguientes daños y perjuicios:

- A favor de Miryam Ramírez Cifuentes: 100 SMLMV (perjuicios morales), 400 SMLMV (daño a la salud), \$23'794.639 (lucro cesante consolidado), \$146'675.080 (lucro cesante futuro), \$1'300.000 (daño emergente) y 100

¹ En el hecho No. 2 de la demanda se hace referencia a la vía que se encuentra en mal estado a la altura de la carrera 31 entre calles 31 A y calle 32, barrio Fortaleza, lugar en el cual se accidentó la señora Miryam Ramírez Cifuentes.

SMLMV (daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados).

- A favor de Ronald Rivera Ramírez: 100 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Walter Rivera Ramírez: 100 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Zoila Cifuentes de Ramírez: 100 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Amparo Ramírez Cifuentes: 50 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de María Mercedes Ramírez Cifuentes: 50 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Fernando Ramírez Cifuentes: 50 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Jaime Salazar Ramírez: 35 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Olga Mercedes Salazar Ramírez: 35 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Diana Maryuri Narváez Castaño: 35 SMLMV (perjuicios morales).
- A favor de Alba Sofía Medina Millán: 35 SMLMV (perjuicios morales).

Una vez revisada la demanda, en primer lugar, se observa petición de amparo de pobreza en los siguientes términos:

CAPITULO VIII. F. PETICIÓN DE AMPARO DE PROBREZA:

8.1 Para el caso particular, mis poderdantes declaran bajo la gravedad del juramento que son personas humildes y sobre todo la víctima principal no alcanza a devengar **ni siquiera un salario mínimo mensual legal vigente**, debido a que sobre todo la víctima directa no se encuentra laborando desde la ocurrencia del siniestro, se encuentra desempleada por su condición de salud al momento en que se instaura la demanda, por los hechos que dieron origen a la presente demanda. En otras palabras, los demandantes se encuentran en una incapacidad para atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia.

Por ultimo solcito respetuosamente a su señoría, les sea concedido a mis mandante el amparo de pobreza habida cuenta que el poderdante se encuentra en el contexto del artículo 151 y subsiguientes del C.G.P. Igualmente, en calidad de apoderado de la parte demandante que se nos permita poder adelantar la demanda y llevarla hasta su culminación ya que con el presente proceso se trata de evitar una injusticia ocurrida a los demandantes, toda vez es una persona de origen humilde y pertenecen a un segmento situado en posición de desventaja.

Al respecto, dispone el artículo 151 del CGP que «[S]e concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.».

Así mismo, tal petición puede ser presentada por la persona que pretende demandar, antes de la radicación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso (artículo 152, inciso 1° *ejusdem*).

Para el efecto, el solicitante debe afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo 151 del CGP, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado (artículo 152, inciso 2° *ejusdem*).

Frente al particular, el Consejo de Estado² ha destacado los siguientes requisitos:

*«Del contenido de las disposiciones en comento, se colige que para que sea procedente el mecanismo de amparo de pobreza se requiere lo siguiente: **i) que la solicitud sea motivada y efectuada bajo la gravedad de juramento**, y **ii) que se acredite sumariamente la condición socioeconómica que da lugar a la citada solicitud**.»*

*Frente a esta última condición, el Consejo de Estado ha modulado su entendimiento en el sentido de indicar que: «[...] **no es necesario probar la incapacidad económica para asumir los costos del proceso (...) y que solo basta con afirmar bajo juramento que se está en incapacidad de atender los gastos del proceso**»³. [...]».*

Así las cosas, y descendiendo al caso objeto de análisis, el Despacho considera que se encuentran configuradas las causales de procedencia del amparo de pobreza citadas en precedencia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- i) El accionante, bajo la gravedad de juramento, manifestó cuáles eran las condiciones de tipo socioeconómico que le impiden asumir los costos del proceso,*
- ii) La solicitud fue presentada por la persona que reúne los requisitos para invocar la figura de amparo,*
- iii) El demandante manifestó bajo la gravedad de juramento, la imposibilidad de sufragar los gastos del proceso.*

*Por lo expuesto, se decretará el amparo de pobreza en favor del señor **Saeed Hashemi Nazari**, con miras a que pueda ejercer su derecho de acción dentro del medio de control incoado. En ese sentido, y comoquiera que el citado sujeto procesal cuenta con un apoderado judicial para que represente sus intereses, se prescindirá de designarle un curador ad litem.»* (negrilla y subrayado del Despacho).

En relación con el trámite para conceder el beneficio, es suficiente afirmar que no se está «[e]n capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos» aseveración que se entiende rendida bajo la gravedad de juramento, para que el juez otorgue de plano el amparo, sin que para el efecto se requiera de un trámite especial, ni es necesaria la práctica de pruebas para una decisión favorable.

Desde luego, en el evento que posteriormente se logre demostrar que fue falsa la afirmación, debe revocarse el beneficio concedido y disponer el inicio de las

² Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 16 de diciembre de 2021. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado No. 11001-03-24-000-2021-00891-00.

³ Cfr., Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 6 de marzo de 2020. Expediente 85001-23-33-000-2019-00189-01(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de julio de 2018, Exp. 11001-03-25-000-2017-00275-00 (1344-2017), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2019, Exp. 05001-23-33-000-2018-00420-01; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

acciones correspondientes por falso testimonio o, en el evento de que cesen los motivos para su concesión, proceder a su terminación acorde a lo señalado en el artículo 158 del CGP.

Así las cosas, se tiene que se solicita amparo de pobreza para cada uno de los demandantes por cuenta de su apoderado, dado que no cuentan con los recursos para atender los gastos del proceso sin desmedro de lo necesario para su propia subsistencia, poniendo de relieve que la afectada principal ni siquiera devenga un (1) smlmv, pues se afirma que se encuentra desempleada desde la ocurrencia del accidente o siniestro que da origen a la demanda.

Con ello en mente, cabe advertir que no es necesario probar la incapacidad económica, sino que, para el efecto, basta la afirmación bajo juramento que se está en incapacidad de atender los gastos del proceso, tal y como lo realizó el apoderado.

En este orden de ideas, si bien la petición fue presentada por intermedio de apoderado judicial, observa el Despacho que cada uno de los demandantes en los respectivos poderes le confiaron la facultad para solicitar el amparo de pobreza, autorización que se torna necesaria para la realización de actos reservados a la parte misma, tal y como lo previene el inciso cuarto del artículo 77 del CGP.

Por consiguiente, el Despacho al encontrar reunidos los presupuestos reseñados reconocerá el amparo de pobreza para cada uno de los demandantes y, en consideración, a que estos ya designaron un apoderado judicial, se prescindirá de la designación de un curador *ad litem* (inciso segundo del artículo 154 *ejusdem*).

En este punto, cabe relieves que los demandantes estarán eximidos de prestar cauciones procesales, pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación y, de ser condenado en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 *ejusdem*.

Ahora bien, respecto de la admisibilidad de la demanda, el Despacho encuentra la siguiente falencia:

1) No hay claridad respecto de la designación de las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 162 del CPACA.

Observa el Despacho que la demanda se dirige exclusivamente frente al Distrito Especial de Santiago de Cali, aun cuando en el hecho No. 7⁴ se afirma que la omisión en la reparación también se advierte frente a EMCALI EICE ESP, así:

7. Queda probado, que las graves lesiones, las secuelas y cicatrices que presenta en la actualidad **MIRYAM RAMIREZ CIFUENTES**, fue con ocasión al hueco existente – el día 27 de enero de 2021-, el cual es emergido por la omisión en la reparación, mantenimiento e inexistencia de señalización del mal estado de las vías por parte del Municipio de Cali y Emcali.

⁴ Índice 3 en SAMAI, Descripción del Documento «3», folio 9.

Así mismo, nota el Despacho que la conciliación extrajudicial⁵ también fue agotada frente a dicha entidad y en cada uno de los poderes fue incluida como parte demandada.

En este sentido, es necesario que la parte demandante aclare al Despacho si su intención también es convocar a EMCALI EICE ESP o, si por defecto, persiste en tener solo como demandado al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la parte demandante proceda a aclarar la demanda conforme a lo previamente expuesto.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 162 del CPACA, se procederá a la inadmisión, otorgándole a la parte demandante un plazo de diez (10) días, a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, para que subsane las falencias enrostradas, *so pena* de rechazo.

Para estos efectos, es necesario que la parte demandante integre la subsanación en un solo documento con la demanda inicial, indicando los cambios introducidos.

Así mismo, deberá la parte demandante atender el numeral 8° del artículo 162 del CPACA, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, respecto del escrito de subsanación de la demanda, esto es, remitir el mismo a los canales digitales de la(s) entidad(es) demandada(s).

De otra parte, en atención a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, y el numeral 8° (adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021), se tiene como canal digital elegido por la parte demandante los correos lawyer.calicolumbia@hotmail.com y equipojuridicoshalom@hotmail.com, citados en la demanda, por tal razón y en concordancia con el artículo 78 numeral 5° del Código General del Proceso, cualquier notificación se entenderá surtida válidamente a través de este, advirtiéndole el deber que le asiste de informar cualquier cambio al respecto.

Por último, en consideración a los memoriales visibles en el índice 3 en SAMAI⁶, por medio de los cuales cada uno de los demandantes le confieren poder al abogado Carlos Adolfo Ordóñez Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.027.847 y portador de la tarjeta profesional No. 233.487 del C. S. de la Judicatura, el Despacho procederá a reconocerle personería para actuar como apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con los términos y con las facultades descritas en el mentado poder y las demás que le otorga la ley (artículo 77 del CGP).

Por las razones expuestas, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE

⁵ Índice 6 en SAMAI, Descripción del Documento «9»

⁶ Descripción del Documento «4», folios 26 – 44 y 65 – 68.

PRIMERO. CONCEDER AMPARO DE POBREZA a los demandantes **Miryam Ramírez Cifuentes** (principal afectada), **Ronald Rivera Ramírez** (hijo de la afectada principal), **Walter Rivera Ramírez** (hijo de la afectada principal), **Zoila Cifuentes de Ramírez** (madre de la afectada principal), **Amparo Ramírez Cifuentes** (hermana de la afectada principal), **María Mercedes Ramírez Cifuentes** (hermana de la afectada principal), **Fernando Ramírez Cifuentes** (hermano de la afectada principal), **Jaime Salazar Ramírez** (sobrino de la afectada principal), **Olga Mercedes Salazar Ramírez** (sobrina de la afectada principal), **Diana Maryuri Narváez Castaño** (nuera de la afectada principal) y **Alba Sofía Medina Millán** (nuera de la afectada principal).

SEGUNDO. PONER DE PRESENTE que dichos demandantes estarán eximidos de prestar cauciones procesales, pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación y, de ser condenados en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 *ejusdem*.

TERCERO. INADMITIR la demanda interpuesta por **Miryam Ramírez Cifuentes** (principal afectada), **Ronald Rivera Ramírez** (hijo de la afectada principal), **Walter Rivera Ramírez** (hijo de la afectada principal), **Zoila Cifuentes de Ramírez** (madre de la afectada principal), **Amparo Ramírez Cifuentes** (hermana de la afectada principal), **María Mercedes Ramírez Cifuentes** (hermana de la afectada principal), **Fernando Ramírez Cifuentes** (hermano de la afectada principal), **Jaime Salazar Ramírez** (sobrino de la afectada principal), **Olga Mercedes Salazar Ramírez** (sobrina de la afectada principal), **Diana Maryuri Narváez Castaño** (nuera de la afectada principal) y **Alba Sofía Medina Millán** (nuera de la afectada principal) en contra del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**.

CUARTO. ORDENAR a la parte demandante que subsane las deficiencias referidas dentro del término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación por estado electrónico de este auto.

QUINTO. ATENDER lo previsto en el numeral 8° del artículo 162 del CPACA, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, esto es, remitir el escrito de subsanación a los canales digitales de la entidad demandada.

SEXTO TENER como canal digital elegido por la parte demandante los correos lawyer.calicolombia@hotmail.com y equipojuridicoshalom@hotmail.com, citados en la demanda, por tal razón y en concordancia con el artículo 78 numeral 5° del Código General del Proceso, cualquier notificación se entenderá surtida válidamente a través de este, advirtiéndole el deber que le asiste de informar cualquier cambio al respecto.

SÉPTIMO Se advierte que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones a través de medios tecnológicos.

OCTAVO. RECONOCER PERSONERÍA JUDICIAL al abogado Carlos Adolfo Ordóñez Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.027.847 y portador de la tarjeta profesional No. 233.487 del C. S. de la Judicatura, para

actuar como apoderado judicial de la parte demandante en los términos y con las facultades delegadas en el memorial poder y las demás que le confiere la ley (artículo 77 del CGP).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado Electrónicamente)

JULIÁN ANDRÉS VELASCO ALBÁN
JUEZ

Afra

Este documento fue firmado electrónicamente, el cual puede consultar con el número de radicado en <https://samairj.consejodeestado.gov.co>